

La Guerra del Pacífico en la Historiografía Peruana: Notas para su Estudio

Carlos Donoso Rojas* - Ricardo Nazer Ahumada**
Universidad Andrés Bello

Resumen

La Guerra del Pacífico es, hasta hoy, fuente de controversias para la historiografía del vecino país. Condicionada inicialmente por factores nacionalistas, la profesionalización del oficio del historiador, y la necesidad de entender el conflicto desligados de ideales patrióticos, han generado un debate que enfrenta las nuevas visiones con aquellos que, siguiendo modelos pasados, continúan percibiendo la historia como un instrumento ideológico.

Palabras claves: Controversia. Guerra del Pacífico. Historiografía. Perú. Nacionalismo.

Abstract

The War of the Pacific is, up to today, a source of controversies for the historiography of the neighboring country. Determined initially by nationalistic factors, the professionalization of the trade of the historian, and the need to understand the conflict untied of ideal patriotic, they have generated a debate that faces the new visions with those that, being still past models, continue perceiving the history as an ideological instrument. Key words: Controversy. War of the Pacific. Historiography. Peru. Nationalism.

La discusión en torno a los orígenes de la guerra comienza en la historiografía del Perú con la obra del italiano Tommaso Caivano, quien en 1882 publicó en Turín su *Storia della guerra d'America fra il Chile, il Perú e la Bolivia* (Ermanno Loescher, 1882, 562 páginas), obra abiertamente favorable a los aliados y que se transformaría en una de las más influyentes de la historiografía de la guerra en el Perú. Reeditada con gran éxito comercial en 1978 y 1979, Caivano plantea por primera vez la hipótesis de que la guerra emprendida por Chile a partir del 14 de febrero de 1879, al invadir territorio boliviano, no era contra Bolivia sino

* Académico Universidad Andrés Bello. cdonoso@unab.cl

** Historiador, profesor de las universidades Alberto Hurtado, de Chile y Andrés Bello. Especialista en Historia de Chile, siglos XIX y XX.

contra el Perú. Para justificar su planteamiento, divide los orígenes del conflicto en causales aparentes y verdaderas.

La causa aparente se establece a partir del hecho que Chile manifestó no tener idea alguna del Tratado de 1873. Una vez ocupada la provincia de Antofagasta, el gobierno peruano ofreció su *mediación amistosa*, proponiendo a Chile abandonar el territorio conquistado previo al inicio del diálogo. En respuesta, Chile habría exigido al plenipotenciario Lavalle confirmar la existencia del Tratado, del cual Chile manifestó desconocer su existencia y contenido, pidiendo posteriormente que el gobierno peruano garantizase su neutralidad. En consecuencia, Chile supuso que el pacto era ofensivo y que una declaración de guerra contra Bolivia necesariamente debía arrastrar al Perú, lo que se avalaba en base a una supuesta entrega de pertrechos de guerra al país altiplánico. Al negar la neutralidad por honrar el acuerdo previo, Chile se habría visto en la necesidad de declarar la guerra, y Perú de seguir adelante con lo establecido en el Tratado¹.

Caivano no justifica sus impresiones con documentos, lo que hace suponer que se hizo parte de los comentarios que circularon en el Perú respecto al supuesto desconocimiento del Tratado de 1873 por parte de Chile.

Más fundamentadas, en cambio, fueron las “causas verdaderas”, las que divide en varios ítems. Como era de esperarse, la principal motivación era la económica. A su juicio, las finanzas chilenas estaban quebradas, mientras la peruana tenía entradas que superaban en el sur los ocho millones de pesos anuales, entre pagos de derechos del salitre y el aumento de las rentas aduaneras. Sólo esto era equivalente más o menos a la mitad de la totalidad de rentas de Chile, por lo que tenía la motivación de apoderarse de las riquezas de Tarapacá.

La firma entre el Perú y Bolivia del Tratado de asistencia mutua de 1873 habría obedecido precisamente a la necesidad de proteger dicho territorio: si el Perú hubiese tolerado la progresiva penetración que venía realizando Chile en la provincia de Antofagasta desde mediados de siglo, corría el riesgo que ambos países consolidasen una alianza que se podía gestar a la luz de los acuerdos limítrofes y económicos de la década de 1870. De no firmar el tratado, era altamente probable que la

¹ Tommaso Caivano, *Historia de la Guerra de América entre Chile, Perú y Bolivia*. Lima: sin datos de editorial, 1979, pp. 45-99.

política expansionista chilena hubiese conquistado sin mayor problema la provincia Antofagasta, conducta que, según Caivano, hubiera sido la ruina del Perú y que más tarde habría asegurado el triunfo de todos los proyectos chilenos de engrandecimiento:

“relativamente nula en una guerra con Chile, aliada con este último, Bolivia hubiera sido de gran importancia en una guerra contra el Perú, pudiendo con la mayor facilidad invadir las provincias limítrofes de Tacna, Punto y Moquegua, mientras Chile operaría por mar sobre los mismos puntos y sobre otros de la República; la cual, obligada a dividir sus fuerzas y a luchar contra enemigos muy superiores numéricamente, habría debido indudablemente sucumbir”².

El reconocimiento de la existencia del tratado, no obstante, habría dado a Chile una buena coartada para declarar la guerra e invadir Tarapacá: al tener carácter de secreto, Chile podía presionar al Perú pidiéndole declarase su neutralidad ante un eventual conflicto con Bolivia. Ello no les daría tiempo de armarse y de salir de las difíciles circunstancias del momento, dando a Chile una ventaja logística indudable³.

El punto anterior está directamente vinculado a la “causa estratégica”. En marzo de 1879, la flota del Perú era muy inferior a la de Chile, independientemente del mal estado en que ésta se encontraba. Perú no tenía fondos disponibles ni suficiente crédito para hacer ninguna adquisición, y, por ello, urgía a Chile no dejar pasar el tiempo necesario para que su vecino aumentara sus fuerzas marítimas, arrastrando al Perú a la guerra lo antes posible. Las gestiones emprendidas por el gobierno peruano para adquirir en Europa dos naves de guerra, además, habrían sido entorpecidas por gestiones diplomáticas chilenas en ese continente, avaladas por hábiles maniobras y por la imagen de orden proyectada por Chile. Enfrentados a un escenario favorable, “el dilema que se había propuesto Chile no admitía términos medios: o debía batir la alianza Perú-boliviana separadamente y mediante la alianza misma, declarándose neutral el Perú, o debía batirla toda junta sin la menor pérdida de tiempo”⁴.

A juicio de Caivano, la hegemonía ejercida por Chile sobre Perú y Bolivia tenía sus raíces en el triunfo sobre la Confederación, y se amparaba en la continua inestabilidad política de ambos países, situación que Chile contribuía a fomentar al dar amparo a líderes

2 *Ibid.*, p. 100.

3 *Ibid.*, pp. 107-108.

4 *Ibid.*, pp. 110-112.

revolucionarios e incluso financiando asonadas militares. Del mismo modo que intentó anexar parte de la provincia de Antofagasta en 1842, el Estado chileno fomentó la inmigración de connacionales con destino a las ricas regiones salitreras, en lo que parece ser una velada política expansionista proyectada al largo plazo⁵.

Dos años después, en 1884, Mariano Paz Soldán publicó en Buenos Aires su *Narración histórica de la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia*, donde reafirma la tesis de la causa de la guerra estuvo en el expansionismo chileno:

“Hoy es una verdad histórica comprobada con documentos oficiales de Chile y por sus mismos publicistas, que la verdadera causa de la guerra declarada por esta nación al Perú y Bolivia en 1879, la que precedió a todo juicio, a toda deliberación, la que daba cierto impulso a las relaciones políticas y comerciales de Chile con sus vecinos del norte, era la ambición de ensanchar su territorio a costa de estos, los huanos de la costa y las salitreras de Atacama y Tarapacá embargaron pues la codicia del gobierno y del pueblo chileno”⁶.

Un parecer similar al de Caivano y Paz Soldán tuvo el entonces coronel Andrés Avelino Cáceres. Partícipe importante de la campaña de resistencia a la invasión chilena, en especial tras la ocupación de Lima, Cáceres no dudó en asignar toda la responsabilidad a Chile de la agresión sufrida, sin mediar provocación, aunque también deslinda responsabilidades a la clase política. En sus *Memorias*, escritas los años inmediatamente posteriores al fin del conflicto, Cáceres deduce que la ocupación de la provincia de Tarapacá por parte de Chile formaba parte de una estrategia de Estado, largamente proyectada y que se valió para su éxito de lo que denomina “los medios más viles e inescrupulosos”. La agresión habría contado, además, con la complicidad de la elite peruana, la que inspirándose más en sus personales ambiciones que en las supremas conveniencias de la patria, se tornó en una eficaz colaboradora del invasor:

“Si nos cupo tan mala suerte, no se debió en modo alguno a la presión de las armas enemigas, sino que es más bien imputable al estado de desorganización en que se encontraba el Perú, a los desaciertos de sus dirigentes y a la menguada actitud de elementos pudientes que no supieron ni quisieron mantener firme hasta el último extremo la voluntad de luchar por la integridad territorial de la nación”⁷.

5 *Ibid.*, pp. 116-119.

6 Mariano Paz Soldán, *Narración histórica de la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia*, vol. I. Editorial Milla Batres S.A., Lima: 1979, p. 83.

7 Andrés Avelino Cáceres, *Memorias. La guerra del 79 y sus campañas: con otros documentos sobre la campaña de La Breña*. Lima: Milla Batres Editor, 1980, volumen I, p. 250.

Las teorías relativas al supuesto expansionismo chileno sobre las regiones salitreras de Perú y Bolivia planteadas por Caivano y Cáceres tuvieron amplia acogida en la historiografía peruana de inicios del siglo XX. Uno de los más reconocidos estudiosos del conflicto en aquel periodo, José María Valega, publicaría en 1917 *Causas i motivos de la Guerra del Pacífico*, obra que junto con recoger los postulados económicos y estratégicos de Caivano, aporta nuevos antecedentes vinculados a factores sociológicos y morales.

A juicio de Valega, Chile necesitaba convertirse en un país productor para exportar en la misma proporción de sus importaciones, a raíz de su agricultura e industria incipientes y de su débil comercio internacional. En caso contrario, seguiría siendo tributario de capitalistas extranjeros. Más claramente, señala el autor, Chile enfrentaba el dilema de obtener, “o la riqueza o el bienestar próximos, encontrando la fuente productiva o la miseria y la ruina, vegetando en su propio territorio”⁸.

A diferencia de Caivano, el predominio chileno sobre Perú y Bolivia no se inicia con el triunfo chileno en la guerra contra la Confederación, sino una vez asumida electo Anibal Pinto, en 1876, quien recibió como herencia de su predecesor, Federico Errázuriz Zañartu, una sustancial mejora en las capacidades militares del país, incluida la adquisición de blindados y de avanzado armamento. Dueño del más completo arsenal del continente, Pinto debió hacer frente a la aguda crisis económica, producto del agotamiento del mineral de Caracoles y el descenso en el valor de la plata, que trajeron como consecuencia la exportación en masa del oro circulante y la inconvertibilidad del billete bancario en 1878, transformado después en papel moneda, ahondando con su depreciación la crisis económica.

Desesperado por la miseria reinante, Pinto, según Valega, habría “rememorado la historia de su Patria”, comprendiendo que la solución a los males financieros de la República siempre, y necesariamente, había pasado por potenciar el dominio en el Pacífico sur. El ejemplo dado por la supresión forzada del Callao como puerto de depósito a favor de Valparaíso, la doble invasión nacional a territorio peruano entre 1837 y 1838, las victorias militares y los pactos favorables a sus intereses de los años posteriores, habrían hecho ver al Presidente la necesidad de

⁸ José M. Valega, *Causas i motivos de la Guerra del Pacífico*. Lima: Imprenta La Moderna, 1917, p. 15.

recurrir, una vez más, al uso de la fuerza como medio de resolver una grave crisis económica, que además amenazaba con alterar el orden institucional de la nación⁹.

En contraste a lo planteado por Caivano, Valega señala que el objetivo de conquista de Chile no era Tarapacá, sino la provincia boliviana de Antofagasta. Sin embargo, la existencia del Tratado de 1873 necesariamente obligaría a Chile a extender su dominio hasta Tarapacá. Según el autor, la firma de aquel acuerdo fue un error grave, en especial porque en nada afectaba al Perú el hecho que Bolivia perdiese Atacama. De acuerdo a su planteamiento, si el objetivo del Perú era evitar la competencia en la explotación y producción del nitrato, más productivo habría sido unirse a Chile por un tratado comercial que a Bolivia con un tratado defensivo:

“Si el Perú, económicamente, ganaba más contratando con Chile una vez dueño del nitrato, que con Bolivia a la cual había que defender de la usurpación, ¿qué interés tenía para el Perú salvar a Bolivia con un tratado quijotesco? O ¿es que el Perú creyó que cinco mil bolivianos mal armados i peor dirigidos eran un contingente apreciable en caso de conflicto?”¹⁰.

Fiel seguidor de las teorías eugenísticas de su época, Valega no duda en explicar el éxito militar chileno en factores relacionados a la superioridad del pueblo chileno, en cuya formación habrían intervenido colonizadores vascongados en conjunción con la raza aborígen. El resultado de dicha combinación había generado un pueblo culturalmente homogéneo. Este factor resultaría clave, según el autor, debido a que la unidad de la raza era un factor indiscutible en el progreso de los pueblos:

“las mismas tendencias, las mismas aptitudes psicológicas i la misma fortaleza material hacen más fácil la conquista de las aspiraciones colectivas. I Chile, que, como hemos visto, ha conservado a través de su evolución, la unidad de su raza, tenía que inclinarse fatalmente del lado de la conquista ante el dilema terrible de morir por aniquilamiento o conquistar para vivir”¹¹.

De este modo, si la guerra era económicamente necesaria para Chile, sociológicamente el triunfo, más que posible y probable, era seguro.

Valega suma a la superioridad física e intelectual del pueblo chileno, una ambición racional de hegemonía que no duda en admirar. En su opinión, sumido en una profunda crisis, Chile actuó prudentemente al analizar todas sus posibilidades de éxito, eligiendo a sus víctimas,

9 Valega, *op. cit.* pp. 16-19.

10 *Ibid.*, pp. 112-113.

11 *Ibid.*, pp. 19-20.

estudiando sus capacidades defensivas y sus limitaciones. El historiador sustenta su teoría al afirmar que Argentina, por ser un país rico y militarizado, no podía ser la presa codiciada. Bolivia, en cambio, con su riqueza salitrera y mineral de Atacama, era un objetivo, al igual que Perú con su rica provincia de Tarapacá.

El país del norte habría ofrecido, además, una oportunidad ideal para una posterior conquista chilena. A juicio de Valega, la descuidada fama de las riquezas peruanas, la deteriorada imagen internacional del país, la ausencia de una conciencia nacional, la anarquía que había corroído las instituciones, la heterogeneidad del pueblo, la escasa honradez de los funcionarios públicos, entre otros factores, habrían contribuido como estímulo a Chile. El Perú, concluye Valega, habría sido el único culpable de sus desgracias, al no saber sacar partido de sus potencialidades y estimular la codicia de los vecinos que veían en él “la posesión inmerecida de tantos dones”¹².

El primer historiador peruano en ligar los antecedentes que desencadenaron la Guerra del Pacífico con el conflicto con España de 1866 fue el ya citado Víctor Maurtua. En su más conocida obra, *La cuestión del Pacífico*, el autor plantea que en 1868, el ministro chileno en Londres celebró un convenio con el de España, con el objeto de que el gobierno inglés permitiera sacar de sus diques dos buques blindados para la península, a cambio de igual permiso para dos naves de guerra chilenas. Esto, en momentos en que la guerra no había terminado de derecho, y Chile tenía con sus aliados el compromiso de no iniciar por sí solo ningún convenio, arreglo o tratado con España estando las relaciones diplomáticas suspendidas.

Maurtua señala, además, que en 1866 agentes chilenos recorrieron Estados Unidos para adquirir, reservadamente, el vapor blindado “Idaho”, el que finalmente se compraría en 1871, llegando a tener ese año cinco naves de guerra y cuatro transportes. El notorio desequilibrio armamentista desarrollado por Chile se acrecentaría ese mismo año, cuando el Congreso ordenó construir dos blindados de gran poder, el “Cochrane” y el “Blanco Encalada”, y dos auxiliares, la “Magallanes” y el “Toltén”¹³.

¹² *Ibid.*, pp. 118-120.

¹³ Víctor M. Maurtua, *La cuestión del Pacífico*. Lima: Imprenta Americana, 1919, pp. 42-44.

La política de rearme de Chile y la imposibilidad por parte de Perú y Bolivia de incurrir en gastos similares habría impulsado la necesidad de establecer un equilibrio en la región, lo que indujo al Perú a intentar establecer una alianza estratégica con Argentina y Bolivia. Esta última nación, desde inicios de la década de 1870, habría sido claro objetivo de conquista por parte de Chile, lo que se demostraba en el abierto apoyo dado a movimientos militares y al incentivo por parte del Estado para establecer capitales e inmigrantes en la provincia de Antofagasta.

El Tratado de 1873 se entiende en el marco de este contexto. Fue el Perú y no Bolivia quien gestó el acuerdo, en base a defender al país altiplánico en el caso extremo de que Chile ejecutara el inminente despojo del litoral, logrando de paso un clima de estabilidad para el buen funcionamiento del estanco del salitre y sentando las bases para una “uniformación” en los modos de producción, lo que se conseguiría mediante un hipotético acuerdo entre ambos gobiernos. Maurtua no indica el origen de esta hipótesis, limitándose a plantear que un eventual convenio salitrero entre ambas naciones resultaba conveniente para Bolivia, dado que la explotación salitrera era aún baja en Antofagasta y que, además, su calidad y precio de costo era muy inferior¹⁴.

En 1979, Alejandro Reyes Flores ofrecería otra muy interesante visión del Tratado. A su juicio, la firma del acuerdo y la ausencia de artículos que hicieran mención a la no intervención mutua entre los firmantes hacen suponer que el Perú buscaba introducirse en el litoral boliviano. Según el historiador, la política de monopolizar la explotación de salitre carecía de toda viabilidad económica si no era practicable en toda la provincia de Atacama. A la conveniencia en la implantación del estanco del salitre para la regulación de su producción y precio había que sumar la del afianzamiento de la presencia del Estado peruano en una provincia como Tarapacá, que permaneció durante décadas ajena a toda intervención fiscal. Ello tuvo como resultado la retirada de capitales y, fundamentalmente, de inmigrantes chilenos.

La detención del renombrado expansionismo chileno habría tenido como resultado la concentración de gente e inversiones en Antofagasta, lo que implicaba, de por sí, una férrea competencia al posterior monopolio salitrero peruano. De allí la necesidad de extender su influjo sobre los

14 Maurtua, pp. 62-64.

inestables gobiernos bolivianos y su interés por acelerar la incorporación de Argentina al Tratado¹⁵.

La participación del país trasandino en los prolegómenos de la Guerra del Pacífico, esbozada por Maurtua, fue retomada por Jaime Irigoyen en 1979. En su artículo "La cuestión diplomática", el historiador refuta la conveniencia del tratado de 1873, al sostener la deslealtad de Bolivia al firmar un acuerdo fronterizo con Chile un año después de la firma del acuerdo, en circunstancias que el tratado había sido suscrito precisamente para contener los afanes expansionistas chilenos. Irigoyen va más allá, al sostener que el Perú debió denunciar la existencia del tratado, por atentar contra el espíritu de la alianza. De haberlo hecho, sin duda corría el riesgo de reforzar un acuerdo entre Chile y Bolivia, pero afianzaba la relación entre Perú y Argentina¹⁶.

Según los términos de la alianza defensiva de 1873, continúa Irigoyen, las partes contratantes se unían para garantizar mutuamente su soberanía y a defenderse de toda agresión exterior, no habiendo estipulación alguna que impidiese a uno de los firmantes a suscribir un convenio con otra nación. Este vacío legal habría sido aprovechado por el gobierno chileno, quien al firmar el tratado limítrofe de 1874 quiso hacer creer en la posibilidad de lograr un acuerdo definitivo sobre las diferencias que existían entre ellos. Con esto, entre otras ventajas, Chile habría ganado el tiempo necesario para que terminasen de construir sus blindados en Inglaterra¹⁷.

Irigoyen concuerda con Maurtua en el hecho de que Perú firmó el tratado de 1873 convencido de que Chile estaba en vías de constituir un imperialismo en el continente, a raíz de la construcción de los blindados y la lenta pero progresiva penetración en Antofagasta y Tarapacá. La idea del Perú era hacer efectivo el artículo 10 del Tratado, en el cual ambas partes podían solicitar la adhesión de otro Estado americano al pacto defensivo. El aliado natural debía ser Argentina, con quien el Perú iniciaría conversaciones reservadas ese mismo año, con el envío de Manuel Irigoyen, ministro plenipotenciario en el Brasil y las Repúblicas del Plata. Para desgracia peruana, en 1873 existían aún complejos

15 Alejandro Reyes Flores, "Relaciones internacionales en el Pacífico Sur. Ensayo de interpretación: 1873-1879", en Wilson Reategui (et.al.) *La Guerra del Pacífico*, volumen I. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1979, p. XXX.

16 Jaime Irigoyen, "La cuestión diplomática", en Francisco Campodónico, *Reflexiones en torno a la Guerra de 1879: ciclo de conferencias magistrales organizado por el Centro de Investigación y Capacitación*, Lima. C.I.C., 1979, p. 146.

17 Irigoyen, p. 165.

diferendos fronterizos entre Argentina y Bolivia, por la soberanía de Tarija y la posesión del Chaco Central. El ingreso argentino a la alianza, por tanto, quedaba condicionado a la solución de los problemas de límites con Bolivia, lo cual necesariamente implicaba por parte de esta nación una renuncia territorial considerable que no ocurriría, y que dilataría la incorporación del país trasandino al tratado¹⁸.

La relevancia del Tratado de 1873 fue relativizada por Edgardo Mercado Jarrin, quien sostuvo que aun sin la existencia del acuerdo entre Perú y Bolivia, la agresión chilena resultaba evidente. El autor fundamenta su hipótesis al sostener que la política armamentista de Chile había afectado su economía en grado tal que sólo podía ser estabilizada con la apropiación y explotación de las riquezas de los territorios de Atacama y Tarapacá¹⁹.

Perú estaba consciente de ello, y conociendo las verdaderas intenciones de Chile, firmó el pacto de alianza con Bolivia, aún más cuando reconocidos intereses chilenos fueron afectados con el estanco y posterior nacionalización de la industria salitrera, y cuando Bolivia se presentaba como una nación debilitada ante las continuas conmociones políticas internas. Con el panorama internacional esclarecido, continúa Mercado, los gobiernos peruanos anteriores a 1879 cometieron el imperdonable error de no aplicar lo que denomina "el más esencial principio de realismo", al no preparar a la nación para la guerra, poniendo sobre bases ficticias la seguridad nacional. Si la alianza con Bolivia y las circunstancias en que se firmó avizoraban la amenaza chilena al Perú, las fuerzas militares debieron ser concebidas, organizadas, entrenadas, equipadas y desplegadas para hacerle frente.

Las autoridades peruanas no fueron tampoco capaces de aprovechar la oportunidad que significaba el hecho de que Chile tuviera problemas con Argentina, y de que en Buenos Aires existieran los mismos temores respecto a las intenciones expansionistas de Chile. Si bien el Perú acertó con la idea de crear una triple alianza para conjurar el peligro chileno, erró al establecer sus prioridades debiendo haber optado por el camino inverso al seguido, es decir, buscar primero un acuerdo con Argentina para luego continuar con Bolivia. Siguiendo esta lógica, la guerra habría sido perfectamente evitable²⁰.

18 *Ibid.*, pp. 137-139.

19 Edgardo Mercado Jarrin, "La política y la estrategia en la Guerra", en Francisco Campodónico, *Reflexiones en torno a la Guerra de 1879: ciclo de conferencias magistrales organizado por el Centro de Investigación y Capacitación*, Lima: C.I.C., 1979, pp. 172-173.

20 Mercado Jarrin, pp. 174-177.

Félix Denegri Luna, uno de los más reconocidos investigadores del Perú, es menos lapidario que Mercado respecto a la falta de visión de las autoridades. En su extenso prólogo a la reedición de *Mi misión en Chile en 1879*, del ministro plenipotenciario en Chile José Antonio de Lavalle, sostiene que la invitación de Bolivia para que el Perú sostuviese un tratado defensivo no sólo podía, sino que debía ser aceptada por el gobierno de Manuel Pardo. A su entender, haberse negado a la invitación hubiese sido incitar a toda la república altiplánica a un entendimiento con Chile respecto a la soberanía de Atacama, lo que ponía en riesgo el litoral peruano sureño, en especial teniendo en cuenta que el puerto tradicional de Bolivia era Arica. Los temores peruanos se confirmaron cuando Chile decidió la compra de dos acorazados, poniéndose en clara superioridad marítima.

El Tratado de 1873, lejos de representar una señal de agresión, respondía a la necesidad del Estado peruano de conjurar cualquier eventual intento de agresión contra Tarapacá. Sobre ese espíritu, dicha nación aceptó la firma del tratado de 1874 entre Bolivia y Chile, suponiendo que con él la causa de los conflictos entre ambos países desaparecería:

“En vez de impulsar a Bolivia a la intransigencia, le sugería los más prudentes consejos, insistía en el carácter condicional y moderador del auxilio peruano; y si ansiaba la celeridad en las negociaciones con Chile, era por el vivo anhelo de llegar a un acuerdo definitivo que serenara el horizonte y disipara el fantasma de la guerra”²¹.

El error del Perú, a juicio de Denegri, no habría estado en firmar el tratado, sino en aceptar su condición de secreto, lo que a su juicio no fue una decisión acertada “porque así se dio pie a suspicacias extremas mientras fue ignorado, y a hipócritas alharacas cuando se exhibió”²².

Sorprendentemente, Denegri centra su análisis en las culpas propias en lugar de recargarle responsabilidades a Chile. De acuerdo a su análisis, el Perú no aprovechó la oportunidad histórica que significó disponer de un erario rico ni de comprender su absoluta vulnerabilidad tras la ocupación de las islas Chinchas por parte de la Escuadra española en 1864. Aunque acertaron con la compra del “Huáscar”, se hicieron otras erradas, como la de los monitores “Manco Capac” y “Atahualpa”, tan costosos como inútiles. Tampoco se reemplazaron los

21 José Antonio de Lavalle *Mi misión en Chile en 1879*. Lima: Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, 1979, p. XXIII y pp. XXIII-XXIV.

22 *Ibid.*

buques de guerra perdidos tras el maremoto de Arica de 1868, ni se mantuvo de modo eficaz los existentes. Chile, en cambio, cuyo producto nacional bruto era mucho menor que el del Perú, supo preparar sus fuerzas militares y navales en forma más coherente, sobre todo en la década de 1870, para posibles guerras internacionales, acentuando su esfuerzo con el incremento de la escuadra. De esta forma la adquisición de los acorazados “Blanco Encalada” y “Cochrane” hizo su armada incomparablemente más poderosa que la peruana²³.

A estos factores, Denegri suma el despilfarro, la desorganización, la falta de sentido financiero y los costos de repeler las continuas tentativas de asaltar el poder. Finalmente, las autoridades peruanas fueron incapaces de entender la trascendencia geopolítica asociada al inicio del ciclo salitrero, que hizo que las tierras olvidadas de Tarapacá empezaran a mirarse con creciente avidez por parte de extranjeros. Los chilenos fueron, en opinión de Denegri, mucho más diligentes que sus connacionales, tanto en la inversión de capitales como en la presencia humana de empresarios, empleados y obreros.

Para Denegri, en la coyuntura de 1879 el Perú tuvo una política pacifista y se vio arrastrado a la guerra por la acción “insana” del Presidente Daza de Bolivia, que puso al país “en las más crueles perplejidades”, según las palabras de José de la Riva Agüero y Osma, citadas por Denegri:

“De un lado, ni la situación ni los elementos militares y navales permitían abrigar la ilusión de una victoria inmediata. De otro lado, la palabra solemnemente empeñada en el pacto secreto, el compromiso de garantía al aliado contra toda desmembración territorial, hacían considerar con justicia como deshonorosísima cobardía el abandono de Bolivia en condición para ella tan crítica. No habría sucedido lo mismo si a tiempo y con la debida resolución y energía hubiéramos notificado al gobierno boliviano que nos oponíamos absolutamente a la ley del impuesto; y que si persistía en ella, declinábamos toda responsabilidad y aun denunciábamos el tratado. Calificando anticipadamente de agresiva la conducta de Daza para con los salitreros chilenos, y por consiguiente fuera de la índole defensiva de la alianza, y sin permitir que los gobernantes bolivianos creyeran ni por un instante que nuestras censuras eran de fórmula y que, si no aplaudíamos, por los menos tolerábamos, el sesgo de sus negociaciones con Chile, habríamos podido conservar con honra la neutralidad. No se procedió con la precisión y diligencia indispensable y el castigo fue la tribulación, la trágica angustia

23 Lavallo, *op. cit.*, p. X.

del caso de conciencia que se le planteó al Perú en febrero del 79, preludio negro y terrible de nuestras infinitas desdichas”²⁴.

Los postulados de Denegri se constituyen en una notable excepción al común de las interpretaciones del origen de la Guerra del Pacífico, y que se exacerbaban con motivo de la conmemoración del centenario del inicio del conflicto. Emilio Luna Vegas es uno de estos casos. En su obra *Perú y Chile en 5 siglos (revisión histórica)*, señala que la necesidad chilena de conquistar el salitre obedecía al hecho de que la gran mayoría de los políticos chilenos eran accionistas de las salitreras y compañías mineras de Tarapacá y Atacama, por lo que la declaratoria de guerra respondía a la necesidad de proteger los intereses que desde inicios de la década estaban siendo amenazados. Entre los más destacados personajes, Luna señala a Cornelio Saavedra, Rafael Sotomayor, Francisco Vergara, Antonio Varas y Alejandro Fierro.

Como el grueso de las inversiones nacionales estaba en territorio peruano, el plan original chileno pretendía ocupar la provincia de Antofagasta y enseguida negociar con Bolivia una alianza para invadir Tarapacá, ofreciendo al país altiplánico, como recompensa, los puertos de Arica, Ilo, Mollendo e Islay, con el correspondiente territorio interior.

Luna avala sus teorías con la ya comentada carrera armamentista iniciada por Chile y su conocimiento de antemano sobre la existencia del tratado secreto. La presión ejercida contra el plenipotenciario Lavalle no sería sino una maquinación muy bien elaborada por el gobierno chileno para justificar al mundo el inicio de su proyecto²⁵.

En términos generales, los análisis efectuados en torno a los orígenes de la guerra han estado condicionados a la sensibilidad existente en las respectivas épocas. Escasos, al menos hasta períodos recientes, resultan los estudios desapasionados o que no trasuntan un cariz descalificatorio hacia Chile.

La Historia de la República del Perú. 1822-1933, de Jorge Basadre, se constituye en una notable excepción a la norma. El más reconocido y prolífico historiador peruano inicia su análisis observando que Chile, tanto a nivel privado como estatal, tuvo una evidente injerencia sobre Bolivia desde comienzos de su vida republicana, lo que se tradujo en la entrega de privilegios exclusivos, intentos de apropiación territorial,

²⁴ *Ibid.*, p. XLII y XLIII.

²⁵ Emilio Luna Vegas, *Perú y Chile en 5 siglos (revisión histórica)*. Lima: Talleres Gráficos de la Librería Editorial "Minerva", 1982, pp. 239-245.

firma de convenios favorables y entrega de apoyo logístico y estratégico para derrocar gobiernos. El Perú no podía quedar indiferente a esta intervención manifiesta, ejerciendo por primera vez su disconformidad en 1872, tras el envío al país altiplánico desde Valparaíso de un numeroso contingente militar al mando de Quintín Quevedo. En respuesta, Perú ofreció al gobierno boliviano apoyo militar, sosteniendo que “las pretensiones del gobierno chileno cesarían desde que supiese que el Perú no dejaría sola a Bolivia”. Reafirmando la postura peruana, los blindados “Huáscar” y “Chalaco” hicieron una demostración militar en Mejillones, a la vez que el gobierno de Pardo enviaba una nota al de Errázuriz expresándole que “el Perú no sería indiferente a la ocupación del territorio boliviano por fuerzas extrañas”²⁶.

La firma del tratado de 1873 con Bolivia fue entendida por Perú, a juicio de Basadre, como un instrumento para garantizar la paz y la estabilidad en las fronteras americanas, buscando la defensa del equilibrio continental, en especial si se proyectaba en el corto plazo con Argentina como nación aliada. Sin embargo, la incorporación del país trasandino enfrentó una serie de objeciones, que iban desde la exigencia Argentina de eliminar el carácter de secreto del tratado, hasta los temores de la propia nación peruana de que el imperio brasileño reaccionara contra la Alianza con un avance hacia su territorio por la zona amazónica, estableciendo además un pacto de alianza con Chile.

La clave de la historia posterior, no obstante, estuvo en la firma del nuevo tratado de límites entre Chile y Bolivia de 1874, y en la confirmación de la superioridad naval chilena, tras la entrega en 1875 de los blindados “Cochrane” y “Blanco Encalada”. A partir de entonces, el Perú debió orientar sus esfuerzos a lo que Basadre llama “guerra preventiva”, orientada a evitar cualquier provocación que justificase a Chile hacer uso de la fuerza. Para ello, a fines de 1875, Perú habría desechado definitivamente la posibilidad de alianza con Argentina, suscribiendo en diciembre del año siguiente un tratado de amistad, comercio y navegación con Chile, cuyos términos garantizaban el intercambio comercial y la exigencia de solicitar el arbitraje de una tercera potencia en caso de cualquier tipo de desacuerdo entre las naciones²⁷.

26 Jorge Basadre, *Historia de la República del Perú. 1822-1933*. Lima: Editorial Universitaria, 1968, tomo VIII, pp. 11-12.

27 *Ibid.*, tomo VIII, p. 28-29.

El tratado no sería aprobado por el Congreso chileno, lo que según Basadre es una señal evidente de las intenciones de Chile. Consumido por una crisis financiera sin precedentes, la política exterior peruana siguió desde entonces una trayectoria errática que no se manifestaría en el reforzamiento de la alianza con Bolivia ni en la búsqueda de un consenso que impidiera ser arrastrado a una guerra que se hizo evidente con el aumento del impuesto al salitre decretado por el gobierno boliviano. La misión Lavalle destinada a mediar entre Chile y Bolivia, no tendría mayor sentido. Por el contrario, el Perú, a juicio de Basadre, habría expuesto a Lavalle a una situación vergonzosa al no informarle de la existencia del tratado secreto, pese a que era por todos sabido que era de conocimiento público. La falta de tino político habría creado la idea en Chile, no sin razón, de que la presencia de Lavalle sólo estaba destinada a ganar tiempo, resultando finalmente que la misión sólo contribuyó a acelerar el ingreso del Perú en el conflicto²⁸.

Una nueva tesis surgió con fuerza en la década de 1980, planteada por Enrique Amayo en su tesis doctoral de la Universidad de Pittsburgh, *La política británica en la Guerra del Pacífico*²⁹; tomando como base la declaración del Secretario de Estado de Estados Unidos, James Blaine, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso Norteamericano, en la que afirma que la Guerra del Pacífico era “una guerra inglesa contra el Perú con Chile como instrumento”, intenta probar la hipótesis que:

“durante la Guerra del Pacífico la defensa de la doctrina del libre cambio, hecha por Chile y Gran Bretaña, convirtió a estos países -tenían intereses comunes- contra el Perú que había optado por la vía opuesta - casi inédita en América Latina- la de la estatización (monopolio del salitre) como instrumento esencial para reorganizar su economía”³⁰.

Sin embargo, por misma época, otro destacado historiador, Heraclio Bonilla, aportaba una nueva e interesante versión del origen de la guerra, orientada a desmitificar el influjo de potencias extranjeras en el desarrollo del conflicto. A su juicio, existen dos tesis referidas a la guerra. La primera, expuesta por el grueso de la historiografía de los países involucrados, adjudica a la historia de los diez centavos el efecto desencadenante del conflicto. La segunda, asociada a una historiografía radical, plantea que la guerra de Chile contra el Perú era una guerra de Gran Bretaña, donde los ejércitos peruanos, chilenos y bolivianos

28 *Ibid.*, tomo VIII, pp. 47-49.

29 Enrique Amayo, *La política británica en la Guerra del Pacífico*. Lima: Perú, Editorial Horizonte, 1988.

30 *Ibid.*, pp. IXX y XX.

serían una suerte de marioneta cuyos hilos habrían sido magistralmente manipulados desde afuera.

Bonilla cuestiona esta teoría al sostener que el rol de inversionistas y *bondholders* vinculados a la propiedad del guano y el salitre se limitó a exigir en su momento a cada una de las partes la protección de sus intereses. Los gobiernos norteamericano, francés e inglés habrían actuado como garantes de las exigencias de sus connacionales, sin tener una participación activa, más allá de considerar a Chile un país más ordenado y, por ende, responsable respecto a sus políticas financieras. La hegemonía conseguida por Gran Bretaña a lo largo del desarrollo del conflicto habría sido consecuencia de las acertadas negociaciones de los accionistas del guano y el salitre, quienes obtuvieron el reconocimiento de las deudas a cambio del implícito apoyo británico a las anexiones territoriales de las provincias Tarapacá y Antofagasta³¹.

El origen inmediato de la guerra, en opinión de Bonilla, es sencillo de resumir. El 14 de febrero de 1878 el gobierno boliviano impuso un impuesto de diez centavos por cada quintal de salitre exportado entre los paralelos 23 y 24, en pleno desierto de Atacama, quebrando de esta manera, a juicio de Chile, el compromiso establecido en 1872 y 1874 por el cual el paralelo 24 había sido reconocido como frontera entre Chile y Bolivia a condición de que el gobierno boliviano renunciara por los próximos 25 años, en 1874, a toda nueva imposición. La respuesta chilena fue la ocupación de Atacama exactamente un año después.

En 1873 el gobierno peruano, a iniciativa del boliviano, había celebrado un tratado de defensa recíproco con Bolivia. La decisión boliviana, esta vez, fue en respuesta a la ya mencionada expedición de Quintín Quevedo, armada y financiada en Valparaíso en contra del gobierno boliviano. Se pensaba que el respaldo de Perú evitaría aventuras de este tipo.

Bonilla considera difícil entender el porqué el gobierno peruano aceptó la iniciativa boliviana. A su juicio, probablemente la mejor respuesta a esta pregunta se encontraba en la carta que el entonces ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José de la Riva-Agüero, escribiera al embajador peruano en La Paz en septiembre de 1873:

“la única política que conviene a Bolivia es definir cuanto antes su situación con Chile. Prolongar el estado actual de cosas es perder

31 Heracleo Bonilla, “La dimensión internacional de la Guerra del Pacífico”, en *Un siglo a la deriva. Ensayos sobre el Perú, Bolivia y la guerra*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980, p. 171.

el litoral y consentir en que se explote en común para que más tarde Chile se lo anexe. La consecuencia de esto sería un grave peligro para nosotros, no perder Tarapacá y Arica, porque creo que primero sucumbiríamos todos los peruanos antes de consentir en ello, sino de una guerra, en la que (eventualmente) Bolivia pudiese convertirse en aliada de Chile. Este temor me ha preocupado hace tiempo y es el que me ha guiado en las negociaciones hasta llegar al tratado de febrero³².

La motivación fundamental, por consiguiente, habría estado en el temor del Perú a que Chile pudiera establecer un pacto militar con Bolivia que perjudicara los intereses del primero. Ante la ocupación militar chilena de Atacama, el gobierno boliviano trató de obtener que el Perú asumiera el compromiso a que estaba obligado por el Tratado de 1873³³.

La historiografía peruana reciente, como lo hizo Bonilla, ha tendido a simplificar los orígenes, remitiéndolos a la existencia del tratado de 1873, a la aplicación del impuesto de los diez centavos por parte del gobierno boliviano (contraviniendo lo dispuesto en el tratado limítrofe de 1874) y a la necesidad chilena de expandirse al norte para remediar su profunda crisis. Carlos Contreras y Marcos Cueto, dos reconocidos investigadores contemporáneos, han afirmado recientemente que la guerra era inevitable, vista a la distancia de más de un siglo y dado el esquema económico y fiscal en que se movían los tres Estados. Ante el dilema de elegir una profunda reforma fiscal que lograrse a largo plazo aumentar los recursos del Estado, o intentar ganar el monopolio de un recurso como el salitre, es fácil comprender que las tres naciones optaran por la alternativa de controlar de modo excluyente la producción del nitrato. Sobre todo si no consideraban, como en el caso peruano, que la guerra fuese para ello un costo inevitable³⁴.

32 *Ibid.*, p. 175.

33 *Ibid.*, pp. 153-154.

34 Contreras y Cueto, *Historia del Perú contemporánea*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, p. 163.

